**Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Comisión de la mujer. Senado República de Chile**

La agrupación Madres de Chile convoca a un número considerable de mujeres a lo largo del país, los cuales en su calidad de madres han debido afrontar la protección de sus hijos e hijas procurando el bien superior de éstos y enfrentando todo tipo de costos individuales incluso sus propios derechos y garantías como personas.

Revisando el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia creemos que hay grandes avances que permitirán prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra las mujeres.

Las investigaciones nacionales e internacionales, sobre violencia de género contra la mujer, muestran que, en general, no solamente tardamos mucho tiempo en denunciar la violencia vivida, sino que, además, muchas veces por contextos o patrones culturales, sociales, económicos y emocionales normalizamos lo que nos ocurre. Y es a propósito de la violencia que viven nuestros hijos, que nos damos cuenta de la relación y dinámica violenta en que nos encontramos inmersas.

Hay terceros relevantes para las mujeres, en este caso son los hijos. Los hombres saben lo relevante que son para ellas.

Hoy queremos visibilizar lo que estamos viviendo como organización y también atañe a muchas madres en este momento. Para eso nos expresamos como MUJERES y MADRES para visualizar que, lamentablemente, se está utilizando este vínculo como un instrumento de violencia.

Para nosotras, los daños a través de nuestros hijos, tienen efectos mucho más amenazantes y vulneradores que la violencia física o psicológica a la que hemos sido sometidas. La existencia de una **violencia vicaria**, es decir, un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal, y es así como **en muchos casos el hijo o hija es utilizado de manera instrumental con el objetivo de hacer daño al auténtico objetivo de la violencia**, la pareja o pareja.

Por denunciar, empoderarnos y tratar de proteger a nuestros hijos estamos expuestas a los cambios de tuición y a la revinculación forzada argumentando síndrome de alineación parental, trastornos psicológicos, ganancias secundarias y despecho. Pero ¿qué pasa cuando la vida de nuestros hijos está en juego? ¿Cómo el derecho del niño de ver a su padre puede estar por sobre el interés superior del niño, que es su propia seguridad?

Durante años hemos tenido que escuchar de parte de los intervinientes en procesos judiciales frases como: "señora usted lo eligió de padre de sus hijos", "¿qué quiere que hagamos ahora? hágase cargo!" "Señora es más fácil reparar a un niño abusado que un niño sin vínculo con el padre!" "¿Quiere que su hijo sea homosexual?". "Conocemos a las mujeres como usted! ¿Qué quiere conseguir con esto?... Entre otras aberrantes y reiteradas frases bordeando la vulgaridad de profesionales de la justicia!.

¿Por qué una mujer no puede ser considerada como un interlocutor válido cuando existen situaciones de vulneración? ¿Por qué no podemos ser consideradas garantes en la protección de nuestros hijos?

¿Cuál es la ganancia secundaria con denunciar abusos y maltratos? Esa es una pregunta a la que siempre nos vemos enfrentadas, ¿por qué proteger a nuestros hijos es considerado un delito?.

Legalmente se establece un plazo de 48 horas para denunciar cuando existe una revelación de abuso o hay pruebas físicas que abran esta sospecha. ¿Qué se debe hacer en esos casos?.

Como madres nos enfrentamos a una violencia desmedida tanto judicial como económica. Muchas enfrentamos las pérdidas laborales al momento de contener y enfrentar un proceso judicial. Peritajes, abogados, terapias de reparación o revinculación hacen que económicamente no podamos solventar y enfrentar la situación. En muchas ocasiones son los mismos padres por intermedio de los abogados los que se ofrecen a pagar pericias a las que somos sometidas arbitrariamente revictimizándonos sin tener ninguna garantía de la objetividad del proceso.

Los estándares probatorios son altísimos y si los niños son pequeños, el poder judicial no les cree. Aún cuando profesionales del área de salud mental se pronuncien del daño en la esfera de la sexualidad, sobre la credibilidad y espontaneidad de los relatos, y ellos a través de informes sugieran la protección del niño.. NO les creen.

¿Quién de ustedes sería capaz de entregar a un niño a un abusador para que vaya a visitas? No se pueden imaginar lo devastador que es convencer y tratar de darle tranquilidad a tu hijo o hija para que vaya a una visita. Más difícil es cuando la visita incluye pernoctación con el señalado como agresor, y luego de eso, contenerlo cuando vuelven. Estar íntegras, aún cuando todo ese tiempo has estado inmersa en el terror más profundo de que vuelvan a ser agredidos.

¿Cómo explicas esto a un niño o niña que tú quieres proteger y nadie en el sistema respeta sus decisiones, deseos y sentimientos?

Como mujeres y madres, nos embarga una sensación de DESOLACIÓN frente al sistema. Es por esto que no podemos invisibilizar la violencia ejercida sobre el vínculo Materno filial. Esto debe sin duda ser considerado como un tipo de violencia indirecta.

El desconocimiento de la dinámica de abuso intrafamiliar y la poca empatía que existe a esta brutal situación por parte de los intervinientes del poder judicial, nos expone a un prejuicio infundado que nos inhabilita como voces válidas de nuestros hijos.

Enfrentadas a comentarios despectivos, como los antes mencionados, además de exponernos desde el momento que se abre una demanda de cuidado personal, se transforma en una amenaza constante de perder el cuidado, cotidianidad y posibilidad de criar a nuestros hijos.

Estos juicios pueden durar más de 2 años, con altos costos económicos, constantes procesos y evaluaciones periciales, tanto de las madres como de los niños, realizados por centros y peritos acreditados por el tribunal, que no cumplen con ningún estándar, ni protocolos establecidos. No se entregan los curriculums de los profesionales que perician, haciendo de esto un lucrativo negocio a conveniencia del mejor postor. En la mayoría de los casos, son las mujeres, al tener muchas veces como prioridad la crianza y protección de sus hijos, que dejan sus empleos en desmedro de su desarrollo profesional y en su capacidad de generar ingresos.

Creemos firmemente que la única herramienta efectiva para enfrentar esta violencia institucional, es la capacitación constante y obligatoria de todos los intervinientes del proceso judicial. Sugerimos además, que en los artículos que se señalan la participación de los distintos ministerios y organizaciones de derechos humanos para mejoras y acuerdos en esta ley, debe también exigirse la participación de representantes del poder judicial.

Es necesario una estricta supervisión y evaluación de la correcta ejecución de los fallos dictados conforme a la ley y la sana crítica, ya que actualmente se basan en el criterio personal de un juez y un estereotipo predeterminado que tienen de las mujeres en los tribunales de familia.

Debe existir un control de oficio por parte del Poder Judicial del cumplimiento efectivo de las penas accesorias especialmente a asistencia obligatoria a programas terapéuticos de igual forma cuando se utiliza esta cautelar en las suspensiones condicionales.

Hemos pedido en muchas instancias que exista un tribunal específico, altamente calificado, que se haga cargo de situaciones graves de vulneración de derechos como lo son el abuso y el maltrato habitual. No se necesita la misma capacitación técnica para pensiones de alimentos o divorcios de mutuo acuerdo que para enfrentar casos de vulneraciones graves. Los intervinientes, muchas veces, no poseen capacitación ni conocimiento suficiente para poder comprender la dinámica del abuso y maltrato. Simplemente, sus fallos reflejan la ignorancia y falta de criterio, además de un prejuicio infundado.

Es fundamental la figura del "Abogado del niño", que debe interiorizarse en la realidad psicológica de su representado. A su vez estar presente en todas las instancias del juicio para garantizar que los deseos y necesidades del niño sean debidamente respetados, garantizando su bienestar por sobre los derechos de los padres.

Por otro lado no hay ningún seguimiento de lo que padecen los niños luego de brutales fallos de cambio de cuidado. Al no considerar a las madres una voz válida frente a nuevas agresiones, los niños quedan en total indefensión y nosotras inhabilitadas por este prejuicio establecido.

Al ser víctimas de violencia institucional, al intentar, en nuestro rol de madre, ser garante de la protección de nuestros hijos, nos vemos también sometidas a una violencia psicológica, económica y de género.

Una violencia tipificada en esta nueva ley, como violencia indirecta, que nos pone en desventaja con respecto al padre de nuestros hijos, permitiendo el sometimiento y victimización de las mujeres enfrentadas a esta situación.

Sin duda es un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres. Pero para que esto ocurra, y se pueda llevar a cabo, se necesita un cambio. Un cambio en las ideas preconcebidas de los intervinientes en los procesos judiciales y en toda la sociedad en general. Un cambio que le debemos, como país, a las nuevas generaciones, ... a NUESTRO HIJOS.

Mari Trini Cerpa Portella. Mail: mtrinicarpa@gmail.com
Ximena Astorga Lagomarsino. Mail: memeastorga@gmail.com

Madres de Chile